

Capítulo VI

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

LAS EVIDENCIAS RECOGIDAS en este estudio llevan a cuestionar los supuestos de la ideología neoliberal en cuanto a las ventajas del libre mercado para transformar la realidad económica y social y avanzar en la superación de la pobreza en nuestras sociedades. En efecto, mientras las reformas se orientan a trasladar la solución de los problemas de trabajo e ingresos a la esfera del mercado y a la responsabilidad de los hogares y los individuos, estos se enfrentan a una estructura ocupacional y social que no controlan y que actúa como límite para el despliegue y los resultados de sus estrategias de vida y de trabajo.

Con la crisis del empleo empresarial –público y privado– y la difusión del empleo precario en todos los sectores del mercado de trabajo, se ha consolidado una estructura ocupacional polarizada entre un núcleo reducido de puestos de trabajo que demandan mano de obra calificada o semicalificada, sujetos a remuneraciones por encima del promedio y a las prestaciones sociales establecidas por la ley, y un amplio espectro de puestos de trabajo que exigen bajas calificaciones para su desempeño, sujetos a ingresos bajos y fluctuantes y elevados índices de desprotección social.

El aumento del desempleo estructural y la mayor precariedad del trabajo, que han pasado a constituirse en los rasgos centrales del funcionamiento del mercado de trabajo en nuestra sociedad, han pro-

vocado a su vez un proceso de cambios económicos y sociales que repercuten en la reconfiguración de la estructura social y en las condiciones de vida de los hogares socialmente diferenciados. La estructura de la sociedad según relaciones de clase se ha reconfigurado en favor de una presencia mayoritaria de los grupos manuales no proletarios y de la clase obrera, dejando atrás el peso de las clases medias que se reducen por la declinación del peso del Estado como empleador. Por su parte, las clases empresariales, siendo minoritarias, se nutren y recomponen con la presencia de propietarios de pequeñas empresas.

Frente a las reducidas oportunidades de empleo en ocupaciones no tradicionales y calificadas, independientemente de las características sociodemográficas de los hogares, se verifica un proceso de diferenciación en el tipo y calidad de la inserción laboral en función de la posición de los hogares en la estructura de clase. Mientras es cada vez más difícil asociar empleos de calidad con el sector empresarial y empleos precarios con el sector informal debido a la amplitud de la flexibilidad laboral en todos los sectores del mercado de trabajo, el acceso a los empleos plenos y la movilidad laboral ascendente han pasado a ser un privilegio de las clases empresariales y de una fracción de las clases medias; entretanto, quienes pertenecen a los grupos manuales no proletarios y a la clase obrera transitan en torno a las formas más diversas de trabajo precario con una inseguridad creciente en sus ingresos y con escasas posibilidades de movilidad laboral y social.

En definitiva, lo que se constata es que los jefes de hogar y los miembros secundarios de los hogares de las clases subalternas, que conforman casi dos tercios de la población, están sometidos con mayor frecuencia a condiciones estructurales que los sitúan más cerca del desempleo abierto y del empleo precario antes que de una inserción laboral plena.

En este contexto, las EFT que despliegan los hogares pobres, que se concentran en estos dos grupos sociales, no siempre tienen como resultado una mejora en los ingresos y en el consumo familiar. Mientras que la centralidad del aporte de los jefes de hogar al ingreso familiar está en cuestión, lo que se pierde por efecto del creciente deterioro o inseguridad de los ingresos del principal preceptor apenas logra compensarse con el esfuerzo laboral de otros miembros, o, en el extremo, ni siquiera contribuye a restaurar el nivel de ingreso familiar previo a su salida.

Por lo tanto, bajo las actuales condiciones, las EFT tienen básicamente una función de alivio a una situación inmediata de indigencia o pobreza, mientras que en el largo plazo pueden llevar a un mayor deterioro de su calidad de vida o a la reproducción intergeneracional de esta condición, ya sea por el ingreso prematuro de los hijos al mercado

laboral y las altas tasas de deserción escolar que lo acompañan, como por su incidencia en el aumento de la oferta de mano de obra no calificada que tiene un efecto depresor sobre los salarios y otros ingresos por trabajo.

En efecto, la mayor movilización de los miembros de los hogares al mercado laboral ha resultado ampliamente funcional a las estrategias de abaratamiento de costos laborales de las empresas. Al mismo tiempo que se ha intensificado la competencia laboral, una mayor presión de oferta junto a las normas que favorecen la libre contratación han sido los mecanismos facilitadores del uso flexible de la fuerza de trabajo, con efectos sobre el aumento de la fuerza laboral expuesta a una situación de inseguridad crónica en sus ingresos con la que se asocian altos índices de pobreza e indigencia.

La fuerte correlación que existe entre la calidad del empleo y la situación de pobreza ha sido ampliamente demostrada a lo largo de este trabajo. Los hogares cuyos miembros presentan una inserción laboral precaria, donde los jefes de hogar, parte de los miembros secundarios o todos estos están expuestos a situaciones de inestabilidad laboral, ingresos bajos y fluctuantes, son los más afectados por una situación de pobreza y de indigencia. El hecho de que apenas uno de cada cuatro hogares, en el mejor de los casos, pueda salir de este circuito de precariedad no es más que una expresión del endurecimiento de las barreras estructurales para avanzar en la equidad y la reducción de la pobreza.

Los efectos de las reformas sobre una mayor concentración de la riqueza, de los ingresos y del consumo se evidencian claramente cuando se analiza el caso de la ciudad de La Paz, donde, en más de diez años, la desigualdad se acentúa provocando la persistencia de la pobreza y, sobre todo, de la indigencia, que siguen aumentando en cifras absolutas. En El Alto, la disminución de la indigencia parece asociarse con otros procesos concomitantes a su conformación como ciudad emergente, pero, aun así, el hecho de que en las dos ciudades seis de cada diez hogares sigan siendo pobres y la mitad entre estos permanezca en la indigencia no es más que una nueva constatación de la sobreexplotación del trabajo en favor de la acumulación del capital y de los intereses de los sectores dominantes.

Las condiciones para avanzar en una distribución progresiva del ingreso no están dadas; la estructura ocupacional de la que depende el ingreso autónomo de los hogares tiende a consolidarse e incluso a tornarse más precaria por efecto de las prácticas empresariales de abaratamiento de costos laborales y de las políticas del Estado para avanzar hacia mercados laborales flexibles en favor del mantenimiento de una competitividad espuria y de corto plazo. Por lo tanto, desde el ámbito de la producción, la distribución y, específicamente, el trabajo, sólo se

vislumbran tendencias más regresivas en desmedro de la calidad de vida de la población.

Mientras la profundización de las reformas neoliberales (privatización del acceso a recursos y servicios, apertura comercial, desregulación laboral, seguridad jurídica para las inversiones, propiedad intelectual) continúa afectando negativamente a todos los factores que, desde el ámbito de la producción, la distribución y el trabajo, inciden sobre la persistencia de la pobreza, el Estado asume para sí un rol subsidiario para resolver las carencias de los más pobres desde la política social. No obstante, las evidencias recogidas de sus propias evaluaciones muestran que, si bien los programas alivian algunas de estas carencias, con excepción de la educación primaria, las políticas sociales sectoriales no tienen los efectos distributivos esperados y van a contramano de los efectos concentradores de las políticas económicas implementadas.

A la luz de los hallazgos de este estudio, queda demostrado que la dinámica del mercado necesita estar combinada con un nuevo tipo de intervención del Estado en función de la cohesión social que la lógica del mercado pretende obstaculizar. No hay recetas para este nuevo papel, pero sí existen tendencias en torno a las cuales reflexionar: la vulnerabilidad del crecimiento económico, del ahorro interno, de la inversión pública, del aparato productivo y las débiles condiciones de inserción competitiva en los mercados, como los efectos paradigmáticos de las políticas de libre mercado en la economía. La mayor precariedad laboral y sus efectos sobre la profundización de la precariedad social y la pobreza son los resultados más visibles del predominio de la lógica de la acumulación y de la rentabilidad fácil, a costa del sacrificio de los trabajadores asalariados y de la subordinación del trabajo no salariado.

Es innegable que el único camino que garantiza las condiciones necesarias para superar la desigualdad social y la pobreza continúa siendo el crecimiento económico, la acumulación, pero, sobre todo, la distribución del ingreso. El cuadro que se presenta en términos de los efectos distributivos desde el ámbito del empleo y de la política social es desolador; sin políticas públicas que tengan como objetivo el empleo y la generación de ingresos para garantizar una vida digna, la explosión del desempleo abierto, del trabajo informal, del trabajo asalariado flexible y mal remunerado, así como el avance de la desprotección social y la pobreza de los hogares, continuarán siendo los dramáticos costos para la sociedad.

En consecuencia, las recurrentes crisis económicas, la crisis del trabajo y la persistencia de la pobreza exigen trascender la noción restringida de crecimiento económico para plantearse nuevamente los

retos del desarrollo y la integración social. Por lo tanto, se trata de avanzar en un cuestionamiento profundo de los resultados de las reformas sobre la economía y la sociedad para reelaborar estrategias alternativas de desarrollo distintas a las que propugna el modelo neoliberal.

Es desde los cambios en la sociedad, que emergen a partir del mundo del trabajo, que puede explicarse el reflujo de los movimientos sociales en la era del neoliberalismo, pero también la emergencia de nuevas formas de expresión y lucha de la sociedad por una mayor integración social y el ejercicio de derechos. Es en los gérmenes de movimientos sociales de nuevo cuño donde deben asentarse las bases de la construcción de un nuevo modelo de Estado y sociedad.